

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE	BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADO	GABRIEL FERNANDO ROJAS JARAMILLO
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO
RADICADO	05266 31 03 001 2012 00306 02 INTERNO 2023-072
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 100
TEMAS	DESISTIMIENTO TÁCITO EJECUTIVO CON PROVIDENCIA QUE ORDENA SEGUIR EJECUCIÓN
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, frente al auto de fecha 14 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, providencia mediante la cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares.

I. ANTECEDENTES

La sociedad **BANCOLOMBIA S.A.** actuando a través de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva en contra del señor **GABRIEL FERNANDO ROJAS JARAMILLO** (Páginas 34-39, archivo digital 02. primera instancia), pretendiendo se librara mandamiento de pago por las sumas de dinero contenidas en tres (3) pagares, así:

“A)-POR CAPITAL:

1°)-La Cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 568.412.204,00 M/L); correspondientes a los siguientes Pagars:

a-) Pagaré Número 3210080618 Por la Suma de \$ 437.500.000,00 M/L, Suscrito en hoja de papel común que se determina en los hechos de esta demanda.

b-) Pagaré sin Número Por la Suma de \$ 99.256.568,00 M/L, Suscrito en hoja de papel común que se determina en los hechos de esta demanda.

C-) Pagaré Número 377814115002452 Por la Suma de \$31.655.546,00 M/L, Suscrito en hoja de papel común que se determina en los hechos de esta demanda.

2o)- Los intereses Moratorios sobre las anteriores sumas de dinero así:

a-) Los correspondientes al Pagaré 3210080618 Por la Suma de \$437.500.000,00 M/L, Suscrito en hoja de papel común que se determina en los hechos de esta demanda, intereses moratorios así: Por los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley; esto es, una y media veces el bancario Corriente, variable mes por mes y que se deben desde el 12 de febrero del año 2.012 hasta que se verifique el Pago total de lo adeudado.

b-) Los correspondientes al Pagaré sin número Por la Suma de \$99.256.658,00 M/L, Suscrito en hoja de papel común que se determina en los hechos de esta demanda, por intereses moratorios a la tasa del 26,14 % anual o a la tasa máxima permitida por la ley; esto es, una y media veces el bancario Corriente, variable mes por mes y que se deben desde el 15 de enero del 2.012 hasta que se verifique el Pago total de lo adeudado

C-) Los correspondientes al Pagaré Número 377814115002452 Por la Suma de \$ 31.655.546,00 M/L, Suscrito en hoja de papel común que se determina en los hechos de esta demanda por intereses moratorios a la tasa del 25,53 % anual o a la tasa máxima permitida por la ley; esto es, una y media veces el bancario Corriente, variable mes por mes y que se deben desde el 12 de febrero del 2.012 hasta que se verifique el Pago total de lo adeudado

TERCERA: Que se sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada y disponer que se tasen oportunamente.”

Mediante providencia del 17 de julio de 2012 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, resolvió librar mandamiento de pago (Páginas 41-43, archivo digital 02. Primera Instancia).

El demandado fue notificado por aviso y debido a que no propuso excepciones, ni canceló el monto de sus obligaciones, mediante auto de fecha 05 de agosto de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado ordenó seguir adelante con la ejecución (Páginas 58-74, archivo digital 02. Primera Instancia)

Realizada la liquidación del crédito y al no haber sido objetada, se aprobó mediante auto del 25 de agosto de 2013 (Páginas 75 y 76, archivo digital 02. Primera Instancia).

El 29 de enero de 2016 Bancolombia S.A. allegó al juzgado documento en el cual consta la cesión de crédito por venta de cartera celebrada entre Bancolombia S.A (cedente) y Reintegra S.A.S. (cesionaria), memorial donde solicitó se tenga a Reintegra S.A.S. como cesionaria y titular de los créditos, garantías y privilegios que le correspondan a la cedente dentro del proceso (Páginas 79 a 103, archivo digital 02. Primera Instancia).

Mediante providencia de 02 de febrero de 2016 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado indicó que, antes de pronunciarse sobre la cesión, la sociedad Reintegra S.A.S. debía conferir poder a un abogado (Página 104, archivo digital 02. Primera Instancia).

El 15 de enero de 2018 el apoderado de Bancolombia S.A. solicitó al juzgado de primer grado librar oficio ante la CIFIN/TRANSUNION para que informe si el demandado posee dineros en las diferentes entidades financieras que relacionó (Páginas 111-113, archivo digital 02. Primera Instancia).

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado mediante auto de 30 de enero de 2018 (Página 114, archivo digital 02. Primera Instancia), ordenó oficiar a la CIFIN emitiendo el oficio No. 053 (Página 115, archivo digital 02. Primera Instancia).

Mediante providencia del 14 de octubre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado resolvió (Archivo digital 03. Primera Instancia):

“PRIMERO. Decretar la terminación del trámite con radicado de la referencia, por desistimiento tácito.

SEGUNDO. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante auto del 31 de julio de 2012. Líbrese los correspondientes oficios.

TERCERO. Se ordena el desglose y entrega de los documentos que sirvieron de base a la demanda, con las constancias pertinentes, previo el pago del arancel correspondiente (art. 116 del C.G.P.).

CUARTO: *Se ordena el archivo de proceso, previa desanotación en el sistema de gestión judicial.*

QUINTO: *Comuníquese lo anterior, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado (fls. 29), informando que, en virtud de la terminación, no quedaron remanentes a su disposición (fls. 31).*

II. LA IMPUGNACIÓN.

En desacuerdo con tal decisión, formuló el apoderado judicial de la sociedad BANCOLOMBIA S.A. recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del auto de fecha 14 de octubre de 2022, en el que se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Como argumentos de inconformidad expuso que, una mirada exegética de la norma aplicada por el juzgado de primer grado lleva a entender que la inactividad del proceso por más de dos (2) años, es desinterés para continuar con el proceso, pero dentro del presente proceso se dictó sentencia el 05 de agosto de 2013 y actualmente se encuentra en fase de ejecución, por lo que, ya hay un derecho cierto sobre una obligación clara, expresa y exigible que sería desconocida si el proceso se termina, máxime que ya se impulsó hasta el proferimiento de sentencia

Cita una providencia del 4 de julio de 2017 mediante el cual, este Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión en proceso radicado 20070007204 resolvió un recurso de apelación de un auto que terminaba el proceso por desistimiento tácito, donde determinó el Magistrado Ponente que: *“la posibilidad de decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito en aquellos juicios que cuentan con sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante la ejecución, resulta violatoria de la constitución por cuanto tal proceder implicaría un abierto desconocimiento de los principios de acceso a la administración de justicia y debido proceso; tanto es ello así que incluso desde el año 2015 se han venido profirieron algunos pronunciamientos en tal sentido al interior de la sala civil de esta corporación, uno de los cuales incluso, se abstuvo de aplicar el literal b del numeral segundo del artículo 317 del código general del proceso donde ya*

se ha ordenado seguir adelante la ejecución desconoce directamente el contenido de postulados constitucionales como el derecho de acceso a la administración de justicia” (errores de ortografía propios del texto citado) (Archivo digital 05. Primera Instancia),

El juzgado decidió desfavorablemente la reposición mediante auto de 31 de octubre de 2022 (Archivo digital 08. Primera Instancia), providencia en la que además concedió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, en el efecto suspensivo, previo traslado a la parte demandada, sin pronunciamiento (Archivo digital 06. Primera Instancia).

El expediente fue repartido inicialmente a este Despacho el 8 de noviembre de 2022, pero, debido a que se allegó incompleto, esto es, únicamente se arribó el auto que decretó el desistimiento tácito y las actuaciones posteriores a éste, no así las actuaciones anteriores que permitieran revisar la inactividad aducida, fue necesario devolverlo, habiéndose repartido nuevamente el 10 de abril de 2023, siendo ahora sí procedente resolver previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

1. EL DESISTIMIENTO TÁCITO.

Conocido es que el procedimiento civil está orientado por un criterio tendencialmente dispositivo de donde se infiere que corresponde a las partes por regla general, el inicio e impulso de la serie. Así mismo, corresponde al Juez brindar el impulso pertinente cuando le corresponda.

De manera que las partes tendrán la carga de cumplir con sus obligaciones procesales dentro de los términos que corresponda, así como al Juez cuando a él concierna, para que el objeto del proceso se verifique; si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez cuando la demora se atribuya a él.

Para conjurar la inercia, desidia e inactividad de las partes en satisfacer una carga procesal o desplegar un acto de procedimiento, necesarios para proseguir la actuación que ha iniciado y es de su exclusiva incumbencia, se ha previsto como remedio figuras como la actualmente denominada *desistimiento tácito*, que además ha sido prevista como mecanismo de descongestión judicial.

Dicha figura se encuentra vigente en el artículo 317 del Código General del Proceso, que dispone en lo pertinente:

“El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obediencia de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial". (Negritas fuera del texto original)

El desistimiento tácito entonces, es una forma anormal de terminación del proceso, la instancia o la actuación y ocupa ahora el lugar que antes ocupó la perención, figura con la cual tiene similitudes, pues tiene lugar a consecuencia de la inactividad de una parte y opera sin necesidad de que la parte la solicite.

Pertinente resulta mencionar que el desistimiento tácito ha sido entendido de diversas maneras; una de ellas es que se comprenda como la interpretación de la voluntad del peticionario de desistir de su pretensión o

solicitud procesal, caso en el cual su finalidad es garantizar la libertad de las personas de acceder o no a la administración de justicia y la otra, es entender la figura como una sanción, en la medida en que opera por el incumplimiento de una carga procesal y se instituye como una manifestación de la potestad sancionadora del juez que se impone sin necesidad de recurrir a la ficción de que el peticionario ha desistido tácitamente de su solicitud. Entendido como una sanción el desistimiento tácito busca garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente, así como el derecho a obtener pronta y cumplida justicia, siendo por tanto una medida legal que pretende disuadir a las partes procesales para evitar las prácticas dilatorias en el trámite jurisdiccional.

3. EL CASO CONCRETO

De cara a la resolución del recurso de apelación que ahora ocupa la atención del Tribunal, importante resulta tener en cuenta, como se indicó en las consideraciones y porque conocido es, que el proceso civil es de parte, y corresponde a ellas no sólo el inicio e impulso del mismo, sino además el cumplimiento de las cargas procesales impuestas por la ley, o el funcionario judicial, dentro de los términos que corresponda.

Y es que una de esas obligaciones que corresponde cumplir a la parte actora en procesos como el que nos ocupa, donde la actuación a seguir para impulsar el proceso es realizar lo pertinente para poder hacer efectivo el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, es perseguir los bienes del demandado o, al menos, presentar la liquidación de crédito actualizada, pues, naturalmente si no se acredita dentro de un término prudencial el cumplimiento de la carga impuesta, la misma normatividad procedimental tiene prevista la figura del *desistimiento tácito*, herramienta otorgada al juez para que termine el proceso, como en el presente caso, en cumplimiento del numeral 2, literal b del artículo 317 del Código General del Proceso, en el cual se indica que, cuando el mismo cuente con sentencia ejecutoriada a

favor del demandante o auto que ordenó seguir adelante la ejecución, el plazo por inactividad será de dos (2) años.

Con base en esta regulación procesal, el *iudex A Quo*, en providencia de 14 de octubre de 2022, decretó la terminación del trámite por desistimiento tácito y, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante auto de 31 de julio de 2012, porque la parte demandante no ha realizado ninguna actuación desde el 16 de enero de 2018 (Páginas 114-115, archivo digital. Primera Instancia).

En cuanto a la procedencia del desistimiento tácito para procesos que ya cuentan con providencia que ordena la continuidad de la ejecución, fue voluntad expresa del legislador consagrar en el mentado artículo 317 que, cuando el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, es posible la terminación y, precisamente por esa especial situación diferencial, se le otorgó un término mayor para la procedencia de la terminación en aplicación de dicha figura, esto es, un término más generoso que el ordinariamente previsto para el resto de supuestos.

No puede decirse que la terminación en aplicación del desistimiento tácito en procesos con providencia que ordena seguir adelante la ejecución comporte desconocimiento de los fallos judiciales, porque en el ámbito civil la ejecución de toda resolución judicial requiere del impulso de la parte interesada, a lo que se agrega que el derecho en principio no se extingue, pues es posible presentar de nuevo la demanda y el derecho solo desaparece cuando se ha decretado dos veces el desistimiento tácito, lo que resulta lógico como sanción al demandante que en dos oportunidades, mediante el uso inmoderado de la jurisdicción, ha hecho comparecer a su contraparte a un litigio que por su descuido no lo ha culminado.

En respuesta a la censura propuesta por el recurrente, en la cual pone de presente que la inactividad del proceso no se la puede interpretar de una manera exegética, encuentra pertinente este Despacho poner de presente que la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, órgano de cierre de esta

especialidad de la jurisdicción, unificó su criterio en cuanto al entendimiento que se le debe dar al artículo 317 del C.G.P., pronunciamiento contenido en la Sentencia STC-11191 de 9 de diciembre de 2020, proferida dentro del expediente radicado 11001 22 03 000 2020 01444 01 y en el que luego de hacer un recuento histórico de la figura del desistimiento tácito, indica la referida Corporación:

“4.- Entonces, dado que el desistimiento tácito» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

Como en el numeral 1° lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la

anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio.

Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada.

Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «desistimiento tácito» no se aplicará, cuando las partes «por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia».

Lo anterior, para indicar que la norma y la jurisprudencia son claras al expresar que, ante la evidente falta de pago voluntario del demandado, debe la parte demandante desplegar una serie de intensas actuaciones encaminadas a obtenerlo de forma coercitiva, máxime, cuando en este caso concreto, durante cuatro (4) años se mostró desinteresada por realizar la búsqueda de bienes del demandado o tan siquiera, presentar una liquidación de crédito actualizada.

Pertinente resulta advertir para finalizar que, el hecho de que un Magistrado de este mismo Tribunal tenga una posición diferente, de cara a la aplicación de la figura del desistimiento tácito en procesos ejecutivos con sentencia, no impone a esta Magistratura actuar en el mismo sentido, máxime que, como se anteló, nuestro máximo órgano de decisión civil si ha avalado la aplicación de la plurimencionada figura en procesos ejecutivos con orden de seguir adelante la ejecución.

En ese sentido, conforme se ha venido exponiendo, para esta Magistratura, es clara la configuración de los supuestos de hecho necesarios para dar aplicación a la ya mencionada causal consagrada en el numeral segundo del artículo 317 del Código General del Proceso, así las cosas, la decisión a adoptar en esta instancia, será la de **CONFIRMAR** el auto apelado, sin lugar a condenar en costas en esta instancia a la parte recurrente, en la medida que no se causaron.

Por lo expuesto, la suscrita **Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 14 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado.

SEGUNDO. No condenar en costas.

TERCERO. En firme este proveído **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ec8a8ab88eb66663663cd67c243523f77a89fd87f61852e3135f773a911f539b**

Documento generado en 29/06/2023 02:46:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>